



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO



Ciudad de México, a los 11 días del mes de julio de 2022

**DIPUTADO HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.**

P R E S E N T E.

Quienes suscriben, **MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA** y **ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO**, personas legisladoras e integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentamos la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, al tenor de lo siguiente:

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS AL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA.

En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial Federal que ha declarado inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal en materia de movilidad, considerando que el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

El Poder Judicial Federal ha dictado sentencias con motivo de la interposición de diversas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la consulta previa (estrecha), prevista en las Convenciones Internacionales, y cuyo efecto es, la declaración de invalidez de leyes o porciones normativas de leyes de



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO



la Ciudad de México por no satisfacer el parámetro estándar y las fases, que su juicio del máximo tribunal, debiese cumplir la consulta previa. Con la propuesta de ley que se presenta se establece ese estándar metodológico desarrollado por el Tribunal Supremo y en cumplimiento de la consulta que debe instaurarse en el proceso legislativo del Congreso de la Ciudad de México.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

PRIMERO. - La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso “e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.¹

Igualmente, hay que advertir que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico que fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades.²

SEGUNDO. - El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consagra el principio de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad al señalar que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas. En ese sentido, debe prevalecer la premisa de que no deben tomarse decisiones en torno a personas con discapacidad, sin que primero se considere su opinión.³

En las Observaciones finales sobre el informe inicial de México de veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió recomendaciones al Estado Mexicano, dentro de las cuales exhortó a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de leyes. Asimismo, las Naciones Unidas, en el Manual para Parlamentarios hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, señala que las personas con discapacidad deben participar activamente en la redacción de legislación y en otros procesos decisorios que les afecten.

TERCERO. – Al respecto, también es preciso señalar que de conformidad al numeral 3 del Artículo 4, Obligaciones Generales, de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que:

“3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las

¹ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los principales derechos de las personas con discapacidad, ver: <https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-principi-discapacidad.pdf>, 01 de julio de 2022.

² *Ibidem*.

³ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, p. 3.

personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán **consultas estrechas y colaborarán activamente** con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.”

Hay que tener en cuenta que el 21 de abril del 2020 esa Suprema Corte de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, en la cual declaró la invalidez total de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, precisando que tal ejercicio consultivo debe revestir, por lo menos, las características siguientes:

- a) Preferentemente directa con las personas con discapacidad.
- b) Regular, es decir, por lo menos debe realizarse en dos momentos del proceso: previo al dictamen y durante la discusión.
- c) Accesible y con participación efectiva.
- d) Significativa, lo que se traduce en que en esos dos momentos del proceso legislativo se debata o analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad.
- e) También debe proporcionarse la información precisa a las personas con discapacidad sobre las consecuencias de las decisiones que tomen atendiendo a cada momento del proceso legislativo, y
- f) Cosmotemática, es decir, debe atender al entorno social de las personas con discapacidad.

CUARTO. – Por otro lado, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la consulta con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e informado, es uno de los derechos de mayor relevancia y desarrollo a nivel normativo en el ámbito internacional.⁴

Al interior del sistema de Naciones Unidas se habla de que el derecho a la consulta es *un derecho angular* para los pueblos indígenas, por lo que, para su debida implementación, es necesario que se “realicen consultas en profundidad con las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible”⁵

Por lo que, el presente Protocolo se fundamenta en el contenido del Art. 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

- a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
- b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

⁴ Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ver: http://www.semarn.gob.mx/Pueblos_Indigenas.pdf, 7 de julio de 2022.

⁵ *Ibidem*.

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de **esos** pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.⁶

Sobre el particular, el Poder Judicial de la Federación, al realizar el control de convencionalidad, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017 se declaró la invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019 (se declaró la invalidez de disposiciones normativas porque no se consultaron de manera adecuada, a pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus prácticas tradicionales.

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018 se invalidaron también por consulta deficiente, diversas disposiciones cuyo objetivo explícito era elevar la calidad de vida de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas del Estado de Guerrero.

En dicho precedente, el Tribunal Pleno estimó que los procedimientos de consulta debían preservar las especificidades culturales y atender a las particularidades de cada caso según el objeto de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto era que debían prever necesariamente algunas fases que, concatenadas, implicaran la observancia del derecho a la consulta y la materialización de los principios mínimos de ser previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo y culturalmente adecuada, asimismo, se refirió que los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de afectar a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, debían observar, como mínimo, las características y fases siguientes:

- a) Fase preconsultiva que permita la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto de consulta, la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, así como la determinación de la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos, lo cual se deberá definir de común acuerdo entre autoridades gubernamentales y representantes de las comunidades indígenas.
- b) Fase informativa de entrega de información y difusión del proceso de consulta, con la finalidad de contar con información completa, previa y significativa sobre las medidas legislativas. Ello puede incluir, por ejemplo, la entrega por parte de las autoridades de un análisis y evaluación apropiada de las repercusiones de las medidas legislativas.
- c) Fase de deliberación interna. En esta etapa que resulta fundamental- los pueblos y comunidades indígenas, a través del diálogo y acuerdos, evalúan internamente la medida que les afectaría directamente.
- d) Fase de diálogo entre los representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas con la finalidad de generar acuerdos.
- e) Fase de decisión, comunicación de resultados y entrega de dictamen.

En estos casos, el Tribunal Pleno ha explicado que, para el efecto de determinar la invalidez de una norma general por vulnerar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que, la afectación directa, no podía tener una connotación exclusivamente negativa, sino que más bien se trataba de una acepción más amplia que abarca la generación de cualquier efecto diferenciado en la

⁶ *Ibidem*.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO



particular situación de los pueblos y comunidades indígenas o afroamericanas a raíz de una decisión gubernamental, pues estimar que la afectación directa fuese sólo aquella que perjudicara a esos grupos bajo los estándares del legislador, implicaría realizar un pronunciamiento a priori sobre la medida que no es compatible con el propósito del Convenio Internacional del Trabajo.

QUINTO. – En virtud de que diversas sentencias del Poder Judicial que ha declarado inválidas las legislaciones locales sobre personas con Síndrome de Down, personas con Autismo, así como de porciones normativas sobre la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal en materia de movilidad, considerando que el proceso legislativo no satisfizo los requerimientos mínimos para la realización de la consulta ordenada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es preciso realizar la presente reforma legal que establece los parámetros de la consulta previa ordenados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias.⁷

SEXTO. - Sin duda, la ausencia de consulta a las personas con discapacidad dentro de su proceso legislativo es un motivo de invalidez de las normas emitidas por el Poder Legislativo.

“En primer lugar, la razón que subyace a esta exigencia consiste en que se supere un modelo rehabilitador de la discapacidad donde las personas con estas condiciones son sujetos pasivos a la ayuda que se les brinda favoreciendo un *modelo social* en el que la causa de la discapacidad es el contexto que la genera, es decir, las deficiencias de la sociedad en la que estas personas se encuentran para generar servicios adecuados una vez consideradas las necesidades particulares de las personas con esta condición. Dicho de otro modo, una ausencia de consulta en cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, significaría no considerarlas en la definición de sus propias necesidades, volviendo de alguna manera a un modelo rehabilitador o asistencialista.

En segundo lugar, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad está estrechamente relacionado con los principios generales de autonomía e independencia que rigen la Convención (artículo 3.a), su derecho de igualdad ante la ley (artículo 12 de la misma Convención) y su derecho a la participación (artículo 3.c y artículo 29) que se plasmó en el lema del movimiento de personas con discapacidad: "Nada de nosotros sin nosotros".

Finalmente, el derecho a la consulta es uno de los pilares de la Convención, puesto que el proceso de creación de dicho tratado fue justamente uno de participación genuina y efectiva, colaboración y consulta estrecha con las personas con discapacidad. La Convención fue resultado de todas las opiniones ahí vertidas. Ello aseguró la calidad de la Convención y su pertinencia para esas personas.

Por lo tanto, el derecho a la consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas nacionales, es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de

⁷ 1. Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, promovidas por la CDHCDMX y la CNDH, que invalida la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México. 2. Acción de Inconstitucionalidad 38/2021, que invalida el Decreto por el que se expidió la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 14 de enero de 2021 y 3. Acción de Inconstitucionalidad 244/2020, que invalida el Decreto por el que se reformó la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 28 de julio de 2020.

condiciones con los demás. Dicho de otro modo, la consulta es lo que asegura que las medidas dirigidas a las personas con discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.⁸

SÉPTIMO. - En el siguiente cuadro comparativo, y con fines didácticos, se presenta el siguiente cuadro comparativo sobre el contenido de la propuesta legislativa:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE ADICIÓN
<p align="center">Reglamento del Congreso de la Ciudad de México</p>	<p align="center">Reglamento del Congreso de la Ciudad de México</p>
<p align="center">TÍTULO QUINTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PLENO CAPÍTULO I</p> <p align="center">De la Duración de la Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el Pleno</p> <p align="center">Sección Sexta Del Dictamen</p> <p>Artículo 103. a Artículo 111, ...</p> <p><i>(Sin correlativo)</i></p>	<p align="center">TÍTULO QUINTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PLENO CAPÍTULO I</p> <p align="center">De la Duración de la Intervenciones y de los Asuntos que se presentan ante el Pleno</p> <p align="center">Sección Sexta Del Dictamen</p> <p>Artículo 103. a Artículo 111, ...</p> <p>Artículo 111 Bis. - La adopción de medidas legislativas que puedan afectar de forma directa o indirecta el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, deberán ser sometidas a consulta previa, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable a dichas materias.</p> <p>La realización de la consulta previa deberá acreditarse en el desarrollo del dictamen relativo a la medida legislativa.</p> <p>Cuando haya necesidad de realizar una consulta previa, las medidas legislativas podrán ser dictaminadas hasta en un plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente en que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México</p>

⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de Inconstitucionalidad 68/2018, ver: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584384&fecha=20/01/2020&print=true, 2 de julio de 2022.

	<p>haya comunicado su turno a la o las Comisiones Dictaminadoras. La o las Comisiones Dictaminadoras podrán solicitar una prórroga de hasta seis meses para concluir la dictaminación correspondiente.</p> <p>En caso de controversia sobre los efectos directos o indirectos de las medidas de que se trate, corresponde a las autoridades demostrar que la medida no tendrá un efecto desproporcionado sobre los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consulta previa.</p>
--	---

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.

De conformidad con la “Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México”⁹, donde se señala que:

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas que llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.”

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres.

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 y 26;
- b) Los Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), artículos 6 y 7.
- c) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4.3.

⁹ Ver: <https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf>, 3 de julio de 2022.



II LEGISLATURA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO



- d) Carta de las Naciones Unidas, artículo 1.3.
- e) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 2.
- f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 1., 2.2. y 2.3.
- g) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1.
- h) Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, artículo 1.
- i) Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 y Años Posteriores.
- j) Principios para la protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, Organización de las Naciones Unidas.
- k) Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, Organización de las Naciones Unidas.
- l) Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
- m) Resolución CD47.R1. La discapacidad: Prevención y rehabilitación en el contexto del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos relacionados, Organización Panamericana de la Salud, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14.
- n) Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 2, numeral 1, 4, Apartado C, numeral 2; 11, Apartado G, y 25, numeral 6.
- o) Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. artículo 1.
- p) Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, artículo 1.
- q) Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, artículos 1, 19, fr. 11, 21, numeral 2, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 111 Bis al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 111 Bis. - La adopción de medidas legislativas que puedan afectar de forma directa o indirecta el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, deberán ser sometidas a consulta previa, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable a dichas materias.

La realización de la consulta previa deberá acreditarse en el desarrollo del dictamen relativo a la medida legislativa.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO



Cuando haya necesidad de realizar una consulta previa, las medidas legislativas podrán ser dictaminadas hasta en un plazo de doce meses, contados a partir del día siguiente en que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México haya comunicado su turno a la o las Comisiones Dictaminadoras. La o las Comisiones Dictaminadoras podrán solicitar una prórroga de hasta seis meses para concluir la dictaminación correspondiente.

En caso de controversia sobre los efectos directos o indirectos de las medidas de que se trate, corresponde a las autoridades demostrar que la medida no tendrá un efecto desproporcionado sobre los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y, en consecuencia, que no se requiere la celebración de consulta previa.

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN.

Ciudad de México, a los once días del mes de julio de 2022.

A T E N T A M E N T E.

Martha Soledad Ávila Ventura

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

Alberto Martínez Urincho

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO